



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: RAMIRO DE JESÚS MEDINA PEREIRA
Demandados: ACP COLPENSIONES - y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 007 2019 00349 01
Sentencia: S-128

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de julio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

RAMIRO DE JESÚS MEDINA PEREIRA demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia del

traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes y rendimientos recibidos. Pretende además el pago de costas y gastos del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 30 de octubre de 1957, por lo que cuenta con más de 60 años de edad; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 20 de octubre de 1978; que tuvo la calidad de empleado público al servicio del Departamento de Antioquia entre 1983 y 1989, con más de 347 semanas a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993; que se trasladó a la AFP PORVENIR S.A. y comenzó a realizar cotizaciones desde el 01 de julio de 1995; y que esa decisión de traslado obedeció al error inducido y a la pésima asesoría por parte del fondo privado, quien estaba obligado a explicar los pormenores y alcance del cambio de régimen pensional, cosa que no se hizo.

CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDADAS

Al contestar, COLPENSIONES se opuso a la prosperidad de las pretensiones por cuanto las mismas carecen de sustento legal y fáctico. Frente a los hechos, acepta la fecha de nacimiento del demandante y su afiliación a la entidad en el año 1978, indicando frente a los demás que no le constan por tratarse de situaciones que están por fuera de su conocimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación demandada, falta de derecho para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción y/o caducidad de la acción e imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, PORVENIR S.A. señala de manera general que no le consta ninguno de los hechos que se relacionan en la demanda, bien sea por tratarse de situaciones relacionadas con otras entidades, o por no existir prueba idónea al respecto. Advierte además que el demandante de vinculó de manera libre y espontánea a la entonces AFP COLPATRIA S.A. desde el 18 de junio de 1995, fecha en la que suscribió el respectivo formulario de vinculación luego de haber recibido una asesoría completa y suficiente. Como excepciones propuso prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y enriquecimiento sin causa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 27 de julio de 2020, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación del señor RAMIRO DE JESÚS MEDINA PEREIRA al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PORVENIR S.A., ordenando el traslado a COLPENSIONES del valor de la cuenta de ahorro individual, incluyendo para el efecto cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales, con los rendimientos que se hubieren causado, como si hubiera permanecido en el RPMPD. Finalmente, CONDENÓ en costas a la AFP PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho el equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, COLPENSIONES interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia en tanto no se logró acreditar con las pruebas aportadas al proceso, la existencia de alguna causal que indique que se pueda declarar la ineficacia del traslado, ya que la motivación principal es por la diferencia en su mesada pensional, lo que no constituye un vicio en el contrato celebrado entre las partes. En 1995 cuando tuvo lugar el traslado, lo

único que se exigía era dejar expreso en el formulario que la afiliación se hacía de forma libre y voluntaria, lo que se demostró en este caso. De mantenerse la declaratoria de ineficacia, solicita se confirme la decisión de trasladar todas las cotizaciones realizadas, sin descuento alguno, es decir, las cotizaciones, rendimientos, cuotas de administración, porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales en forma indexada, ya que así lo ordena la Corte Suprema de Justicia en tanto la declaratoria de ineficacia implica que todo vuelva a su estado anterior.

PORVENIR S.A. también interpuso recurso de apelación, advirtiendo que el deber de información para el momento histórico de traslado era solamente con base en la ley 100 de 1993, el cual se cumplió a cabalidad según se acredita con el formulario de afiliación, ya que ninguna persona en uso de sus facultades plenas relacionadas con un negocio jurídico, más del perfil del demandante como servidor público, plasma una firma sin conocer y aceptar unas condiciones. Agrega que si lo que se pretende es que las cosas vuelvan al estado natural, se requiere que el afiliado devuelva los conceptos que por rendimientos se generaron. Respecto de los seguros previsionales, el RAIS indica que son seguros que se descuentan, no de forma caprichosa, sino porque la ley 100 lo autoriza para generar un seguro para los riesgos y son valores ya causados que mantuvieron vigentes las pólizas para cubrir esos eventos. Además, como PORVENIR tampoco participó en el traslado, no puede ser condenada en costas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó dentro del término alegatos de conclusión solicitando se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare que al demandante no le asiste derecho a que se declare la ineficacia del traslado, toda vez que la única posibilidad de traslado de regímenes de pensión está contemplada en el literal e del artículo 2º

de la ley 797 de 2003, que modifica el artículo 13º de la Ley 100 de 1993 y sin que sea el caso. Agrega que el juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de COLPENSIONES, quien, sin haber participado en el trámite de traslado, debe afrontar la carga de la futura prestación, generándose para ésta un desequilibrio financiero. No obstante y de considerarse que efectivamente es procedente la declaratoria de ineficacia, solicita se adicione la sentencia en el sentido de ordenar a la AFP PORVENIR que traslade a COLPENSIONES la totalidad de la cotización realizadas, es decir, los aportes y rendimientos, gastos de administración, aportes al fondo de pensión de garantía mínima, y cuotas de seguro previsional, con la respectiva indexación, lo que tienen sustento en sentencias de la Corte Suprema de Justicia como la SL 4989 de 2018 y la SL 1688 de 2019.

El apoderado judicial del demandante también hizo uso de dicha oportunidad legal con el fin de que sea confirmada la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia del traslado al RAIS. Señala que, de las pruebas recaudadas en el proceso, se puede concluir que el asesor comercial del fondo privado nunca le suministró una información adecuada, suficiente y clara sobre las implicaciones del traslado de Régimen, pues sólo le manifestó que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se acabaría, y, por ende, la plata se perdería, siendo la mejor opción la afiliación al fondo privado donde se podría pensionar en cualquier tiempo e incluso por un mayor valor. Dice además que, desde el inicio, PORVENIR S.A. incumplió su obligación legal de suministrar información atendiendo sus particulares condiciones de edad y semanas cotizadas y no aportó ningún elemento de prueba con el propósito de acreditar el cumplimiento a su deber. Como soporte jurisprudencial cita las sentencias SL 1452-2019, SL 1897-2019, SL 1689-2019 y SL 1421-2019.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES a través de los recursos de apelación, conocer del grado jurisdiccional de consulta en lo no recurrido, con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del Sr. RAMIRO DE JESÚS MEDINA PEREIRA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A. queda en la obligación de devolver.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** RAMIRO DE JESÚS MEDINA PEREIRA nació el 30 de octubre de 1957 (fl. 13); **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 20 de octubre de 1978, fl. 14; **(iii)** además, estuvo vinculado al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA entre el 4 de junio de 1983 y el 21 de mayo de 1989; y **iv)** que el 18 de junio de 1995 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la entonces AFP COLPATRIA S.A. (Hoy PORVENIR S.A.), con efectos a partir del 01 de julio de ese mismo año, entidad en la que se encuentra actualmente afiliado, fl. 95.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por la AFP PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los

siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del art. 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar ad portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales"*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque

obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y

3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que este pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información al afiliado, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019).

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Traslado cuotas de administración.

De otro lado, en cuanto a lo discutido por la AFP PORVENIR S.A. en el recurso de apelación, relacionado con que se excluya de la orden de devolución las comisiones por administración, los seguros previsionales y toda suma diferente a la cuenta de ahorro individual; basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en

cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por

concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en tanto el Juez de Primera Instancia ordenó la devolución de todos los conceptos mencionados.

Eso sí, dicha orden de trasladar los conceptos referidos en la sentencia de primera instancia y anteriormente mencionados, debe incluir la respectiva indexación, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según se solicita por COLPENSIONES, tanto en el recurso de apelación, como en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, por lo que en este puntual aspecto será MODIFICADA la sentencia.

Condena en costas.

Finalmente, otro tema que cuestiona la apoderada de PORVENIR S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la condena en

costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se **CONDENARÁ** en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 7º Laboral del Circuito de Medellín, el día 27 de julio de 2020, pero la **MODIFICA** en el sentido de **CONDENAR** a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, con la debida indexación.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 099
del 9 de junio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **12c29e4717f890ee6f2f600eafddd902030b26570e996a4b801d5041c7959907**

Documento generado en 08/06/2021 12:18:50 PM